

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021)**

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral de doble instancia instaurado por SINDY NORENA PIEDRAHITA MORALES en contra de GUSTAVO ADOLFO CAÑAS GOEZ y el MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS (Radicado 05129-31-03-001-2018-00140-01).

**ANTECEDENTES**

Pretende la actora, previa declaración de la existencia de un contrato de trabajo con el señor Gustavo Adolfo Cañas Góez entre el 13 de julio de 2017 y el 26 de septiembre del mismo año, se condene al pago de salarios insolutos, la indemnización por despido injusto, auxilio de cesantía, intereses a la cesantía, prima de servicios, vacaciones e indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T.; además solicita que el municipio demandado sea condenado al pago solidario de todo lo pedido; y por último, pide que se condene a las costas del proceso (fls. 2 a 3).

Como fundamento de lo anterior, expuso en lo esencial los siguientes hechos: el señor Cañas Góez suscribió un contrato para el mantenimiento de algunos edificios culturales con el municipio de Angelópolis; para desempeñar las

labores que se desprendían de este contrato la vinculó el señor Gustavo Adolfo; dicho oficio se dio entre el 13 de julio de 2017 y el 26 de septiembre del mismo año “... *en un horario de lunes a sábado desde las 8:00 am y hasta completar ocho (8) horas diarias*”, como salario se pactó la suma de \$200.000 semanales; el contrato suscrito fue uno a término indefinido y finalizó sin justa causa; se le quedó adeudando por salario la suma de \$1.150.000, correspondiente a 6 semanas de trabajo; se le adeuda lo que reclama; y finaliza diciendo, que el municipio de Angelópolis es solidariamente responsable de lo pedido, dado que era el ente beneficiario de los servicios (fls. 1v. a 2).

El aludido ente municipal dio respuesta a la demanda en forma oportuna. Aceptó la existencia y características alegadas de un contrato con el señor Gustavo Adolfo Cañas; de los demás hechos, dijo que no le constaban o que no eran tales. Exponiendo las razones que estimaba procedentes, entre ellas la de que no existió con ella un contrato de tipo laboral, se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas. Propuso como excepciones de mérito las que denominó: inexistencia de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de la responsabilidad solidaria laboral (fls. 47 a 51).

El señor Gustavo Adolfo Cañas Góez, no obstante haber sido notificado del auto admisorio de la demanda y haber recibido copia de la misma y sus anexos (fl. 37), no se hizo presente en el proceso.

El Juzgado Civil del Circuito de Caldas (Ant.), en sentencia del 27 de septiembre de 2019, absolvió a las personas demandadas de las pretensiones de la demanda. No hizo condena en costas (fl. 117 y audio digital fl.118).

Frente a tal determinación interpuso recurso de apelación el apoderado de la parte demandante, pero la Sala estima que por carecer de un verdadero

sustento, en tanto se limitó a decir que había un contrato a término indefinido y que por tanto debía reconocerse la solidaridad en contra del Municipio de Angelópolis, el presente asunto se estudiará por el grado de la consulta, conforme a las directrices que consagra el artículo 69 del CPT y de la SS. Sobre lo que es la falta de sustentación del recurso de apelación, esta Sala de Decisión Laboral, en sentencia del 2 de julio de 2015 (Radicado 2013-0524), sostuvo:

*La claridad y precisión en refutar los argumentos dados por el fallador de primer grado cuando toma una decisión, sea esta absolutoria o condenatoria, es indispensable para que el juez de segunda instancia estudie y decida la inconformidad planteada en el recurso de apelación. De no ser así, en los términos de los artículos 57 de la Ley 2 de 1984 y 35 de la Ley 712 de 2001, el camino a seguir no puede ser otro distinto al de abstenerse de estudiar el referido recurso, por falta de una adecuada sustentación. La Sala Octava de Decisión Laboral, en sentencia del 6 de julio de 2007 en el proceso de Humberto Herrera Ortiz, contra el Instituto de Seguros Sociales (Rad. 2006-0175), sobre esta materia dijo:*

*“Vista la sustentación del recurso presentado por el apoderado de la parte accionada, encuentra la Sala que no es el adecuado e idóneo como para desatar la impugnación.*

*En efecto, la obligación de sustentar correctamente el recurso de apelación en materia laboral bien puede colegirse de la reforma introducida por la Ley 712 de 2001 al Código Procesal del Trabajo, según la cual “la sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”. (Artículo 66 A C.P.T. y de la S.S., adicionado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001).*

*A su vez, el tratadista Fabián Vallejo Cabrera en su libro “Derecho Procesal del Trabajo y la Seguridad Social”, en relación con este punto concreto anota:*

*“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, quien interponga este recurso tiene la obligación de sustentarlo ya sea en el acto en que ello ocurra o dentro del término que el Juez tiene para resolver si lo concede o lo niega...La jurisprudencia nacional ha definido la duda que se produjo con motivo de la reforma al Código de Procedimiento Civil por medio del decreto 2282/89 en cuanto no dijo nada sobre tal exigencia, silencio que dio pie para*

*sostener en el procesal civil que la sustentación fue eliminada. Empero con la reforma que trajo el referido decreto se dirigió únicamente al proceso civil, necesario es concluir que las referencias que la ley 2ª de 1984 y especialmente el artículo 57 hizo al procedimiento laboral no fueron tocadas y siguen con vigencia.*

*(...)*

*Pero además, el principio de consonancia (art. 35 de la ley 712 que creó el 66ª del CPT y de la SS) impone la sustentación por cuanto solamente de esta manera se podrá determinar cuando la sentencia o la decisión en general está o no en “consonancia con las materias objeto de recurso de apelación”. (Página 201-202. Cuarta Edición 2006. Librería Jurídica Sánchez R.)*

*La obligación de fundamentar correctamente el recurso de apelación en materia laboral es una carga procesal ineludible so pena de que el mismo no pueda ser conocido por el superior, ya que su competencia está legalmente restringida a los motivos de inconformidad de la providencia debidamente sustentados, y aunque si bien puede presentarse una sustentación formulada dentro del término legal, si ella no guarda íntima relación con lo declarado en la providencia, no puede esta Colegiatura conocer de dicho recurso ya que las inconformidades manifestadas por el impugnante nunca tendrán la vocación de atacar la decisión y, por ende, surtiría los mismos efectos que cuando el recurso es declarado desierto por falta de sustentación.*

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

## CONSIDERACIONES

A partir de la fundamentación fáctica y las súplicas del petitorio, es pertinente rememorar como el artículo 22 del C. S. del T. define el contrato de trabajo como “... *aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración.*”.

El artículo 23 ibídem, modificado por el artículo 1° de la ley 50 de 1990, trae los elementos esenciales requeridos para su configuración, a saber:

*“...a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de la duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y, c) Un salario como retribución del servicio...”*

Reunidos estos tres elementos, se entiende la existencia del contrato de trabajo sin dejar de serlo por razón del nombre otorgado ni de las condiciones o modalidades agregadas, en atención a lo dispuesto en el numeral 2° de la misma norma.

Y el artículo 24 del C.S. del T. (Ley 50 de 1990, art. 2), es claro en consagrar una presunción de su existencia en los siguientes términos:

*“Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”.*

De acuerdo a lo anterior, para que pueda afirmarse la existencia de un contrato de trabajo basta que se acredite una prestación personal del servicio, o lo que es igual, una actividad material o inmaterial de una persona natural hacia otra natural o jurídica, salvo que obre prueba de inexistencia de la subordinación jurídica o de una remuneración.

En el presente caso, del material probatorio recaudado, sería posible colegir la existencia de un contrato de trabajo entre la demandante y el señor Gustavo Adolfo Cañas Góez, pues de los dichos de los testigos recibidos, concretamente los de César Augusto Hincapié Guzmán y Nuvin Denci Morales Rodríguez, lo menos que resulta discutible es la existencia de unos servicios personales prestados por la primera al segundo, los cuales consistieron en labores de resane y pintura en la casa de la cultura de Angelópolis, actividad que había sido contratada por este ente territorial conforme al contrato que obra a folios 19 y ss.

Es más, podría llegar a sostenerse que el contrato no fue a término indefinido sino por obra o labor determinada, porque el contrato administrativo acabado de referir así lo sugiere, sin que exista impedimento alguno para ello, pues en materia laboral no solo es el juez el que conoce el derecho, sino que las calificaciones que hagan las partes no pueden erigirse en una limitación para sostener lo contrario. Sobre esta materia de la congruencia, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia del pasado 26 de mayo (Rad. 70072) sostuvo:

*Sobre la aplicación de la congruencia de la sentencia que exige el art. 305 del CPC, hoy 281 del CGP, esta Sala tiene enseñado, ver sentencia CSJ SL3850-2020, que, en virtud de ello, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda o en las demás oportunidades que el código señala, así como en las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas, si así lo dispone la ley.*

*No obstante, según la sentencia en cita, el juez no está limitado a la literalidad de las reclamaciones o pretensiones, sino a la fundamentación y demostración que sobre estas haga la parte actora, a quien se le impone el deber de aportar los elementos de juicio que las acrediten y conduzcan a una decisión favorable.*

*De tal suerte que la demostración de la incongruencia de la sentencia, como se asentó en la sentencia CSJ SL1910-2019,*

*[...] no se puede limitar a un cotejo mecánico entre las pretensiones de la demanda y lo decidido por el juez, esto es, un simple juicio*

*comparativo entre los escritos a que se refiere el mencionado art. 305 del CPC, como lo sugiere el recurrente, pues para tales efectos, también será preciso poner de presente la actividad que despliega el fallador en su labor de juzgamiento para resolver el litigio mediante la interpretación o aplicación de la ley sustancial, según las apreciaciones probatorias del caso. (Resalto fuera del texto)*

*En efecto, esta Sala en sentencia CSJ SL, 27 jul. 2000, rad. 13.507, sostuvo que «el principio de congruencia en ningún caso quiere decir que las condenas impuestas en la sentencia deben ser un calco de las pretensiones de la demanda, pues bien puede ocurrir que la solución jurídica, resultante del examen fidedigno y sin alteración de los hechos y con respaldo en el ordenamiento normativo, sea distinta a la propuesta por el demandante».*

*Es decir, el principio de congruencia no se limita a un simple ejercicio comparativo entre la demanda y la parte resolutive de una sentencia, pues esta es resultado de un ejercicio complejo en el que, se reitera, al juez le compete aplicar la norma jurídica que rige el caso, conforme a los hechos demostrados en juicio, sin que las razones de derecho invocadas por las partes aten su decisión o limiten su competencia. Por tanto, el ejercicio de subsunción o de hermenéutica jurídica es exclusivo del órgano dotado de jurisdicción, no de las partes. Así lo explicó esta Corporación en la sentencia CSJ SL 15718-2015:*

*“(…), en procura de materializar el derecho a la justicia, los jueces no se encuentran atados a los argumentos esbozados por las partes sino al tema o materia objeto del litigio, porque conocedores del Derecho, con miras a resolver los asuntos que les sean planteados en la demanda, en su contestación o en el recurso de apelación, deben investigar y aplicar las normas que según su saber y ciencia estimen que regulan el caso -iura novit curia- aún con prescindencia de las invocadas por partes”.*

Pero las anteriores conclusiones, es decir, de la existencia de un contrato de trabajo y su modalidad de obra o labor determinada, no tienen la entidad suficiente para que se profieran decisiones condenatorias, ya que la misma jurisprudencia ha dicho y reiterado, que para que esto último ocurra, es necesario que exista prueba de otros presupuestos, tales como los extremos temporales, el despido y el salario.

En materia de fechas de ingreso y de retiro no aparece una prueba convincente al respecto. Téngase en cuenta, como se acabó de ver que, si bien el dicho de

los testigos es suficiente para afirmar la prestación personal de los servicios, no lo es menos que es francamente deficitario para acreditar los extremos temporales y el despido, ya que el testigo Hincapié Guzmán afirma solo haber sido compañero de la demandante por un corto período de tiempo: 20 días, sin saber nada después, pues se desplazó a la ciudad de Medellín. Afirma que los servicios se iniciaron en el mes de junio (sin especificar año), cuando en la demanda se refiere que estos comenzaron en el mes de julio de 2017. Súmese a lo anterior que la otra testigo es la madre de la demandante, lo que de por sí la coloca en situación de sospecha (art. 211 del CGP), sus afirmaciones tienen como sustento lo que le dijo la demandante (ex auditu auditu) y, por si fuera poco, refiere como extremo final de los servicios el 26 de octubre de 2017, cuando en la demanda se habla del 26 de septiembre, y nada sabe sobre el monto del salario, aunque sostiene que le quedaron debiendo 5 jornales, cuando en la demanda (hecho 8, fl. 2) prácticamente se alega que nunca le pagaron éstos, pues se reclaman los correspondientes a 6 semanas.

Ahora bien, no podría sostenerse que se dio una confesión ficta o presunta por la actitud que asumió el señor Cañas Góez en el trascurso de proceso (no se hizo presente en ninguna actuación), porque no se cumplió con los requisitos que la jurisprudencia laboral ha establecido para comportamientos de esta naturaleza. V. gr. en sentencia del 10 de febrero de 2021 (Rad. 57957), la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia sostuvo a este respecto:

*Sin embargo, es oportuno recordar que la Corporación tiene establecido que para que opere tal efecto procesal y con el fin de garantizar el derecho de contradicción, el juez de primera instancia debe especificar o concretar, en el caso de la inasistencia del demandado a la audiencia de conciliación y según el artículo mencionado, cuáles hechos de la demanda se presumen como ciertos, de modo que no es válida una alusión general e imprecisa, como en este caso sucedió, al afirmarse que se daban «por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda» (CSJ SL 6843-2016, CSJ SL934-2018 y CSJ SL3689-2020).*



Y en decisión del 15 de febrero de 2017 (Rad. 47044), en cuanto a la que establecía el artículo 210 del C de P. Civil, hoy 205 del CGP, sostuvo:

*Sobre los requisitos para que opere la confesión ficta, es importante recordar lo dicho por esta Corte, en sentencia CSJ SL6843-2016, 25 may. 2016, rad. 49975, en la que se puntualizó:*

*Vale la pena recordar que la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sostenido que para que la confesión ficta prevista en el artículo 210 del C.P.C. se configure es indispensable que el juez de primera instancia determine y especifique cuáles hechos del cuestionario escrito, de la demanda o de la contestación a ésta son susceptibles de confesión, en los términos del artículo 195 de la misma codificación, a fin de que la contraparte pueda ejercer eficazmente y de manera oportuna sus derechos de defensa y contradicción.*

En conclusión, sobran argumentaciones para afirmar que la Sala comparte la decisión absolutoria a la que arribó la falladora de primer grado, pero por las razones de que dan cuenta los párrafos anteriores.

Sin costas en esta instancia, dada la manera como se conoce del asunto.

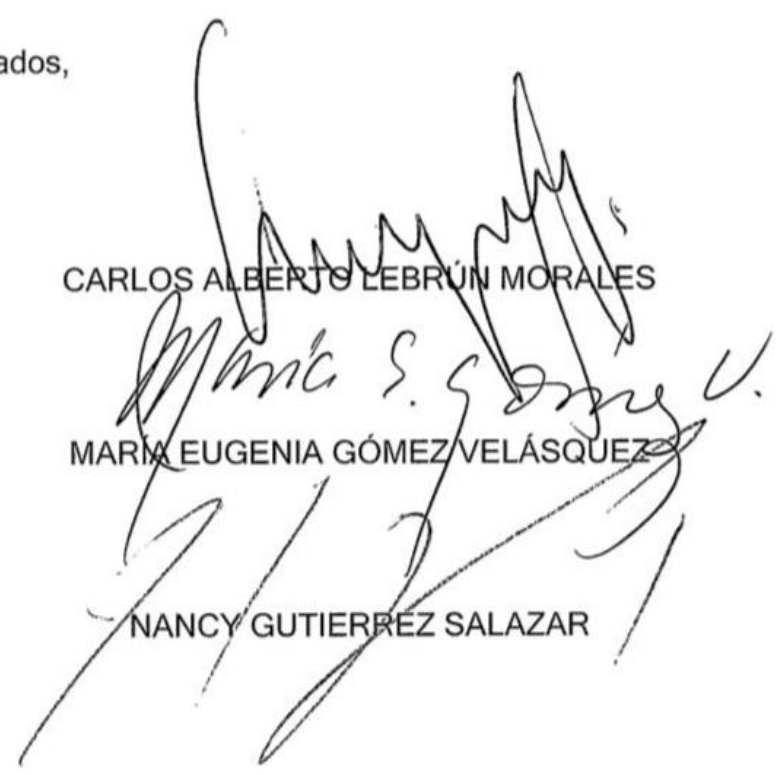
#### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en su integridad la sentencia objeto de revisión por vía de la consulta, pero por las razones de que da cuenta la parte motiva de esta providencia.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO, en aplicación del numeral 3° del literal d, del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, durante la vigencia del Decreto Legislativo 806 del 2020, según lo dispuso la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la providencia AL2550-2021

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

Maria E. Gómez Velásquez

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR